

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I. ¹, veintidós de febrero de dos mil veintitrés

Radicación n°.	05360 31 03 002 2019 00244 02
Proceso.	Verbal
Demandantes.	Flor María Ramos Loaiza
Demandado.	EAGAS S.A.S
Procedencia.	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí
Decisión.	Revoca auto que declaró probada excepción previa
Tema.	Excepción de inepta demanda. Acumulación de pretensiones.
Rdo. interno.	059-22
Interlocutorio No.	045-23

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandante en contra del auto del 28 de junio de 2022, mediante el cual se declaró probada la excepción previa de inepta demanda y como consecuencia, se declaró terminado el proceso Verbal formulado por Flor María Ramos Loaiza en contra de EAGAS S.A.S.

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. Presentó Flor María Ramos Loaiza demanda verbal en contra de la sociedad EAGAS S.A.S., exponiendo como fundamentos fácticos que el representante legal de esta persona jurídica, Silvio Antonio Ramos Bonilla, mediante engaños le había hecho firmar, a ella y a su progenitora, María Cleofelina Loaiza de Ramos, la escritura pública No. 2918 del 26 d agosto de 2010, de la Notaría Cuarta de Medellín, contentiva de la transferencia de los derechos y acciones hereditarias que éstas tenían dentro de la sucesión de

¹ Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. “La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.”

Joaquín Emilio Ramos Henao, respecto de las cuatro acciones en la mina de Oro, Plata y Aluvión o veta, denominada Opirama, ubicada en el municipio de Anserma (Caldas).

Expuso que, con fundamento en dicho documento escriturario, adelantó trámite sucesoral de Joaquín Emilio Ramos Henao y liquidación de la sociedad conyugal de éste con María Cleofelina Loaiza de Ramos, ante la Notaría Segunda de Itagüí, en el que finiquitó con la adjudicación de los citados derechos a favor de la sociedad antes citada, como subrogataria de los mismos, que se protocolizó en la escritura pública 1007 del 14 de mayo de 2019.

Cimentado en lo anterior, solicitó se declarara la inexistencia, o en su defecto la nulidad absoluta del acto de transferencia de derechos contenido en la escritura 2918 del 26 de agosto de 2010, antes referenciada; y como consecuencia de ello, la nulidad del acto contenido en la escritura 1007 del 14 de mayo de 2019 que viene de citarse.

2.- Trámite. La referida demanda fue admitida el 13 de noviembre de 2019, y una vez notificada la parte demandada, ésta propuso como excepciones previas, entre otras:

La ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones. Aduciendo que como pretensión segunda subsidiaria 3.1., se había solicitado la nulidad absoluta de la escritura pública 2.918 del 26 de agosto de 2010, por vicios en el consentimiento (error); sin embargo, al tenor de lo establecido en el artículo 1741 del Código Civil, dicho vicio produce es una nulidad relativa, siendo incompatibles ambas pretensiones y por ende, la pretensión consecuencial, correría la misma suerte, es decir, serían excluyentes al tenor de lo establecido en el artículo 88 del Código General del Proceso.

Falta de jurisdicción y competencia. Argumentando que se configuraba con relación a la pretensión de declaratoria de nulidad de la escritura pública 1.007 del 14 de mayo de 2019, pues de conformidad con el numeral 19 del artículo 22 del Código General del Proceso, la competencia para resolver la nulidad de las sucesiones por causa de muerte, se radicaba en los jueces de familia en primera instancia, y por ende, el juzgado solo tenía competencia para conocer del proceso de nulidad de la escritura pública 2.910 del 26 de agosto de 2010.

3.- El auto apelado. Mediante proveído del 28 de junio de 2022, el a quo declaró probada la excepción previa de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, pero con el fundamento planteado para la excepción de falta de jurisdicción y competencia, pues consideró que por tratarse la pretensión consecencial de una nulidad de sucesión y liquidación conyugal, correspondía a los jueces de familia y, por tanto, no resultaría viable, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 88, numeral 1° del Código General del Proceso, que la parte actora acumulara dicha pretensión.

Aunado a lo anterior, expuso que la nulidad de la partición y la liquidación de la sociedad conyugal, no surgía como una simple consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto jurídico que comprende la venta de derechos hereditarios, ya que éste era un negocio jurídico distinto, que implicaba un análisis independiente y no podía considerarse como una mera secuela de la pretensión que le antecede.

4.- La apelación. En contra de la decisión referenciada, la parte demandante, oportunamente interpuso recurso de apelación, argumentando que la misma, en atención a la regla técnica de la *perpetuatio jurisdictionis*, constituía denegación de justicia; toda vez que, lo que se atacaba fundamentalmente en la demanda era el acto de compraventa contenido en la escritura pública No. 2918 del 26 de agosto de 2010 de la Notaria Cuarta de Medellín y que, una vez abrogada la competencia por el juez, no le era posible su alteración, esto es, dicha competencia se convertía en privativa; debiéndose además, tomarse en cuenta el factor de conexidad para la atribución de competencia.

Explicó que el referido factor tenía su razón de ser, en el principio de economía procesal, que se reflejaba, entre otras muchas formas, en el fenómeno de la acumulación de pretensiones; por tanto, no podría pretenderse que declarada la invalidez del acto contenido en la escritura pública No. 2918 del 26 de agosto de 2010 de la Notaria Cuarta de Medellín (pretensión principal), se acudiera a adelantar el trámite de la nulidad de la escritura pública No. 1007 del 14 de mayo de 2019 de la Notaria Segunda de Itagüí, desconociéndose la duración del proceso, lo que eventualmente podría generar eventuales e irreparables perjuicios a la parte actora.

Resaltó que, se había declarado una excepción previa que no había sido

fue propuesta dentro de las que de forma “*antitécnica y extemporánea*” esgrimió la parte accionada, pues el argumento planteado como sustento de la excepción declarada no era el considerado para declarar la prosperidad de la misma.

De otro lado, expuso que no se había considerado tampoco el aspecto orgánico, esto es, que la jurisdicción ordinaria la integraban los jueces civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de familia, de ejecución de penas, de pequeñas causas y de competencia múltiple, y los demás especializados y promiscuos creados por ley.

CONSIDERACIONES

1.- De las excepciones previas. Fueron instituidas con la finalidad de subsanar las irregularidades existentes para que evitar futuras nulidades, ya sea, procurando el saneamiento de dichas falencias y que el proceso pueda seguir su curso o, en su defecto, terminándolo cuando no existe la posibilidad de que las falencias advertidas puedan remediarse, o la parte que incurrió en las mismas, omita la corrección oportuna de éstas.

Atendiendo lo anterior, se han clasificado en dos grupos: Perentorias, que son aquellas que implican la terminación del proceso y dentro de las cuales se encuentran: Pleito pendiente, inexistencia del demandante o del demandado, y el compromiso o cláusula compromisoria.

Dilatorias, que son las que pueden ser subsanadas para la continuación normal del proceso, esto es: La falta de jurisdicción, falta de competencia, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunicad, albacea o de cualquier otra calidad en la que se actúe por activa o por pasiva, ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales que se exijan o por indebida acumulación de las pretensiones, dársele a la demanda el trámite de un proceso diferente, no comprender todos los litisconsortes necesario, omitirse la citación de todas las personas que dispone la ley, haberse notificado el auto admisorio de la demanda a una persona diferente a la que figura como parte resistente.

En cuanto a la indebida acumulación de pretensiones, tenemos que ésta puede presentarse cuando se trata de pretensiones que deben ser conocidas por diferentes jurisdicciones o que aun correspondiendo a la ordinaria, tienen regulado una vía procesal diferente, el juez es incompetente o son incompatibles, salvo que se promuevan como principales y subsidiarias; igualmente, cuando son varios demandantes o demandados y las pretensiones no provienen de una misma causa o no versan sobre un mismo objeto, ni tienen relación de dependencia, o no pueden valerse de las mismas pruebas.

Las referidas excepciones se encuentran enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso y son de carácter taxativo, por tanto, solo pueden alegarse como tal, las circunstancias que expresamente se encuentren enunciadas en esta preceptiva.

La oportunidad y trámite para su formulación fue regulada en el precepto 101 del mismo compendio normativo, donde se señala que deben ser formuladas por el demandado dentro del término del traslado de la demanda, en escrito separado y acompañado de las pruebas que se pretendan hacer valer; de éstas debe darse traslado a la demandante, por el término de tres (3) días en la forma establecida en el artículo 110 del Código General del Proceso; y se decidirá sobre las mismas, antes de la audiencia inicial, si no requieren la práctica de pruebas, pues en caso contrario, éstas serán practicadas en dicha audiencia, en la que además se resolverá sobre las excepciones propuestas.

En el evento de que se advierta la configuración de una excepción perentoria, o que, tratándose de una dilatoria, no se haya subsanado oportunamente, se deberá declarar terminado el proceso y disponer la devolución de la demanda y sus anexos a la parte actora.

2.- De la acumulación de pretensiones. Esta figura tiene como finalidad la economía procesal, por lo que permitió el legislador que en un solo proceso puedan definirse la mayor cantidad de pretensiones posibles que tenga el actor respecto de un mismo demandado, de acuerdo con lo contemplado en el precepto 88 del Código General del Proceso, pero además de la coincidencia de partes.

El doctrinante Hernando Morales Molina², al realizar el estudio sobre el tema, realizó una clasificación en acumulación de pretensiones simples o concurrentes y acumulación sucesiva; en la primera, se presentan varias pretensiones para que sean definidas todas en su integridad y, en la segunda, si bien también se presentan varias, el estudio de la segunda depende del acogimiento de la primera.

Ahora, para la procedencia de la acumulación de pretensiones, se exigen algunos requisitos generales, como lo son la competencia del juez, la igualdad de trámite para todas y la no exclusión entre ellas, que alude a la objetiva y para la subjetiva, esto es cuando existe pluralidad de sujetos demandantes y/o demandados se exige, adicionalmente, que provengan de la misma causa, versen sobre el mismo objeto, se hallen entre sí en relación de dependencia y se puedan servir de las mismas pruebas.

En las demandas ejecutivas, además, pueden acumularse pretensiones de varias personas, cuando éstas persigan, total o parcialmente, los mismos bienes del deudor.

3.- Caso concreto. Se invocó como pretensión principal, la declaratoria de la inexistencia de la transferencia de los derechos y acciones herenciales efectuada por las señoras María Cleofelina Loaiza de Ramos y Flor María Ramos Loaiza a favor de la sociedad EAGAS S.A.S., efectuada mediante escritura pública No. 2918 del 26 de agosto de 2010 de la Notaría Cuarta de Medellín, y como subsidiaria, su nulidad; y como consecuencial de ambas, la nulidad del acto jurídico contenido en la escritura pública 1007 del 14 de mayo de 2019 de la Notaría Segunda de Itagüí.

Respecto de dichas pretensiones, estimó el a quo, que existía una indebida acumulación, en razón de que el segundo documento escriturario contenía una sucesión y una liquidación de sociedad conyugal, y que la competencia para declarar la nulidad de estos actos recaía en el juez de familia, lo que impedía que pudiera pronunciarse al respecto.

Efectivamente, el numeral 20 del artículo 22 del Código General del

² MORALES MOLINA, Hernando. Parte general. Pág. 365 y 366, citado por Hernán Fabio López Blanco en su obra Código General del Proceso. Parte General. Pág. 504 y 505.

Proceso, establece que corresponde conocer a los jueces de familia, en primera instancia: *“19. De la rescisión de la partición por lesión o nulidad en las sucesiones por causa de muerte y la liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales entre compañeros permanentes.”*

Sin embargo, adujo la parte demandante, que para la procedencia de dichas acumulaciones debía considerarse el factor de conexión o conexidad, que permitía que un funcionario judicial que en principio no era competente para conocer de determinado asunto, se le investía de facultades para hacerlo, en razón de la economía procesal.

Al respecto, debe indicarse que si bien es cierto el planteamiento efectuado por el recurrente con relación al factor aducido, el mismo no resulta aplicable al caso concreto, en razón que para acudir a la figura de la conexión, cuando una norma de manera expresa, atendiendo ciertas circunstancias específicas, relacionadas con asuntos que pueden acumularse u originarse de manera simultánea con en el trámite de una demanda, le atribuye competencia al juez que en circunstancias iniciales no la tendría, alterando así la competencia que se establece de manera general; es decir, que solo resulta admisible aducir la conexidad para atribuir competencia, cuando expresamente lo establece una disposición normativa, por tratarse de una excepción.

En el *sub judice* si bien existe norma que contempla la posibilidad de que el juez que conozca de la inexistencia o nulidad de un acto jurídico, pueda resolver la nulidad de los demás actos que se hayan fundamentado en aquél, no es cierto que esa posibilidad se extienda a todos los factores que atribuyen la aptitud legal, es decir, esa posibilidad no excluye que el juez deba ser competente para decidir sobre todas las materias involucradas, salvo en relación con la cuantía, que es la regla exceptuada dentro del factor objetivo, pero como la misma alteración no se predica de la naturaleza del asunto, como sub factor, dentro del objetivo, es claro que si hay disparidad en la competencia para conocer las distintas pretensiones acumuladas, la unión deviene impróspera preliminarmente.

Así las cosas, es acertada la conclusión del operador jurídico de primer grado, en el sentido de que la declaratoria nulidad de sucesión y liquidación de sociedad conyugal es competencia del juez de familia, por lo que no podría entrar el funcionario judicial en materia civil entrar a pronunciarse sobre su procedencia o

no.

Sin embargo, difiere esta Corporación de la decisión de declarar probada la excepción previa de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, cimentada en dicha circunstancia, en razón de que, en el presente caso, la nulidad de la sucesión y liquidación de la sociedad conyugal que contiene la escritura 1007 del 14 de mayo de 2019 de la Notaría Segunda de Itagüí, fue planteada como consecencial y no como una principal, lo que no le impide al juez de primer grado interpretar el libelo y adoptar la consecuencia que corresponda, en el marco de sus competencias, sin invadir la aptitud de otro y sin emitir un fallo inconsonante, es decir, que en el evento de procedencia de la pretensión principal consistente en la nulidad de la transferencia de derechos, bien puede el juzgador entrar a determinar las consecuencias de dicha declaración, estableciendo si lo planteado como pretensión consecencial es pasible de declarar o si es otro la consecuencia de esa eventual inexistencia.

Ahora, atendiendo al ejercicio de la interpretación de la demanda, acto obligatorio que debe realizar el juez en conjunto, con criterio jurídico, no mecánico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, absteniéndose de un entendimiento literal, pues es necesario que trascienda de su misma redacción, para descubrir su naturaleza y esencia, puede colegirse que la nulidad planteada como consecencial, si bien, eventualmente puede llegarse a configurar como tal, no podrá serlo de manera directa, pues se requiere de un trámite adicional que escape de la órbita del juez cognoscente, sin embargo, tal como se viene de indicar, esto no obsta, para que, de ser en caso, el operador jurídico analice en la respectiva sentencia, una vez determinado la procedencia de la pretensión principal, de serlo, las consecuencias que son propias de la prosperidad de ésta, y encausar de manera adecuada las que requieran el agotamiento previo de otros trámites o procedimientos.

Por tanto, bajo tales consideraciones, estima esta corporación que en el presente caso no debió declararse la prosperidad de la excepción de indebida acumulación de pretensiones, máxime cuando no fueron los argumentos en los que se cimentó el a quo para adoptar dicha decisión, los aducidos por el demandado al momento de formular la misma.

Ahora, si bien le es permitido al juez el examen de su competencia y la

debida acumulación de las pretensiones que se realice en una demanda, ello trasciende cuando la falta de competencia es total y, por consiguiente, alguien más detenta esa facultad; de ahí que la norma conmine la remisión del expediente a quien tiene competencia (Art. 90 CGP), pero como en este caso, más allá de la acumulación de pretensiones, no hay un juez competente para decidir todas las pretensiones, era del caso considerar que el juez civil era el competente y que, de prosperar la pretensión principal, debía modular su decisión en cuanto a la pretensión consecuencial para no irrumpir en la competencia de otro, pero, en todo caso, sin impedir el acceso a la justicia, como se hizo en este caso.

También lo es que, en este último caso, debe examinarse la demanda, como se expuso anteriormente, haciendo una interpretación en conjunto, de tal manera que se procure la continuidad del proceso, y se permita la emisión de una decisión que resuelva de fondo el conflicto planteado.

CONCLUSIÓN.

En consecuencia, se revocará la decisión apelada, para, en su lugar, declarar la no prosperidad de la excepción previa de indebida acumulación de las pretensiones y continuar con la etapa subsiguiente.

Se condenará en costas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **REVOCA** el auto proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUÍ, el 28 de junio de 2022, dentro del proceso VERBAL instaurado por FLOR MARÍA RAMOS LOAIZA en contra de EAGAS S.A.S., por las razones esbozadas en la motivación y, en su lugar,

RESUELVE.

PRIMERO. SE DECLARA NO PRÓSPERA la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones, alegada por la parte demandada.

SEGUNDO. SE CONDENA a la parte demandada al pago de las costas causadas en primera instancia, a favor de la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el juzgado de origen.

TERCERO. SE FIJA como agencias en derecho, la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, esto es, UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.000).

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO
Magistrado